

Feminismo en Costa Rica: –Contexto, perspectivas y desafíos–

GABRIELA ARGUEDAS RAMÍREZ

JULIO DE 2019

- El movimiento feminista en Costa Rica tiene una larga trayectoria que, si bien ha atravesado momentos de interrupción o debilitamiento, ha logrado consolidar importantes transformaciones que se han plasmado en reformas legales, políticas públicas y cambios culturales; los cuales, aunque limitados, se observan de manera más evidente en las generaciones más jóvenes.
- Sin embargo, parece existir un desconocimiento generalizado de esta trayectoria histórica, de las dificultades y de los contextos de las luchas del movimiento de mujeres y feminista de generaciones anteriores, lo que puede constituir una debilidad para los activismos contemporáneos. También persiste la dificultad para concretar una agenda feminista interseccional, de cara a una avanzada neomasculinista y fundamentalista religiosa, que identifica en el feminismo a su principal adversario político.
- Es necesario integrar la dimensión medioambiental, de manera efectiva y estratégica, con la mirada interseccional, dentro de una lucha feminista por la justicia social.

Perspectiva Histórica

En Costa Rica el movimiento feminista y de mujeres ha caminado ya un largo y significativo trayecto, y ha cosechado victorias notables, considerando que el contexto sociopolítico latinoamericano se ha caracterizado por un persistente modelo patriarcal de relaciones sociales.

Desde los primeros pasos del movimiento sufragista, a finales del siglo XIX, hasta la consolidación del movimiento por la legalización del aborto, en la segunda década del siglo XX, las movilizaciones feministas y de mujeres han obtenido logros determinantes en el campo de la política pública y la legislación, las cuales, a su vez han contribuido a la transformación (en mayor o menor medida) de prácticas sociales sexistas, y han problematizado arraigados prejuicios asociados al género, la clase, la etnia o raza y a la sexualidad.

Por supuesto, como ha sucedido con todas las conquistas sociales de poblaciones históricamente discriminadas, esas victorias tienen límites, y reciben la oposición e, incluso, el sabotaje de los sectores sociales que las rechazan y las combaten. Veamos, por ejemplo, las objeciones que los constituyentes presentaron a la aprobación del derecho de las mujeres al sufragio. Se consideraba que el voto femenino sería una amenaza para la familia, para la estabilidad moral del país y, sobre todo, para la forma en que los hombres vivían su vida cotidiana.

Este tipo de afirmaciones continúa resurgiendo en el país cuando se debaten otros derechos históricamente negados a las mujeres. Valga aclarar que esta retórica del miedo ha sido utilizada para oponerse al reconocimiento de derechos de las mujeres, de las personas racializadas, migrantes, y LGBTQI, en muchos países. No es una estrategia exclusiva de Costa Rica. Y este hecho me permite señalar que el análisis de los retos y las urgencias que enfrenta el feminismo en el país no se pueden leer al margen del estado de las cosas en la región y el mundo.

Si bien la historia de Costa Rica se diferencia del devenir histórico latinoamericano en ciertos aspectos importantes, comparte con la región nudos políticos, culturales y económicos que son determinantes. El surgimiento de organizaciones de mujeres y feministas, claramente definidas como espacios autónomos de otros movimientos e instituciones,

en la América Latina de los años setenta y ochenta estuvo vinculado, principalmente, a las necesidades económicas de la mayoría de las mujeres. Numerosas organizaciones de mujeres se dedicaron a impulsar proyectos productivos, campesinos, de acceso a la vivienda, entre otros, en el contexto de la crisis económica de los ochenta. También muchas organizaciones nacionales y centroamericanas fueron creadas para generar alianzas de mujeres que permitieran una mayor participación en los espacios sociales de análisis, incidencia y debate en torno al conflicto armado y los procesos de pacificación en Centroamérica.

En Costa Rica el acceso a ciertos servicios, los cuales son clave en la garantía de derechos humanos de las mujeres, fueron asegurados por el Estado de Bienestar desde los años cincuenta y fueron expandiéndose hasta los setenta, servicios entre los cuales se cuenta, por ejemplo, los de salud y educación. El acceso a atención sanitaria durante el embarazo, el acceso a anticonceptivos orales y a la salpingectomía, la despenalización del aborto terapéutico, la licencia por maternidad y el derecho al divorcio son importantes derechos que fueron consolidándose en estas décadas.

Contexto

Las primeras dos décadas del siglo XXI en Costa Rica y en toda América Latina se han caracterizado por una incesante confrontación entre una multiplicidad más compleja de actores sociales, que disputan no solo la hegemonía sobre el ámbito público sino también la redefinición de los términos aceptables para la convivencia social. La reacción contra los avances feministas de las últimas décadas del Siglo XX en el plano político y sociocultural ha pasado de ser la esperable expresión de malestar de los sectores conservadores que defienden los roles tradicionales de género, a una organizada y beligerante resistencia contra los derechos de las mujeres, en particular, y contra la doctrina progresista de los derechos humanos, en general.

La diversidad de actores conservadores (más específicamente anti-feministas), ha tornado aún más complejo el escenario político, tanto en Costa Rica como en el resto del continente americano. Y es que no se trata de un fenómeno de mero alcance nacional. La avanzada neoconservadora es transnacional



y, más interesante aún, acumula aliados de diversas ideologías políticas. Grupos organizados de izquierdas y de derechas, seculares y religiosos, forman parte de la “cruzada” global contra la “ideología de género”, el feminismo, los derechos de las personas LGBT e, incluso, contra la secularización del espacio público.

Considero que es importante analizar este problema desde dos dimensiones. Por un lado, la relación dialéctica de los feminismos con los Estados y el plano intergubernamental, que impulsó el “mainstream de género” y, por otro, las transformaciones sociales y políticas resultantes de la profundización del modelo económico neoliberal.

El Gender Mainstreaming

La transversalización de género dentro de las funciones que cada una de las instituciones del Estado debe realizar fue una de las principales demandas de las aliadas feministas que trabajaban dentro o cerca de los gobiernos o de las instancias internacionales desde los años ochenta. Esta estrategia no fue celebrada de manera unánime por todos los movimientos feministas: las críticas vinieron principalmente de los más cercanos al feminismo socialista y popular. Sin embargo, la red internacional de organizaciones feministas que logró, con notable éxito, la aprobación de la declaración de Beijing en 1995, demostró en aquel momento que el trabajo político estratégico y colaborativo podía generar un impacto normativo nunca antes visto.

A pesar de las razonadas críticas a la institucionalización del feminismo, una de las cuales era el peligro de la cooptación estatal de los espacios de organización social feminista, es preciso reconocer también los fundamentales cambios obtenidos. En el caso de Costa Rica, durante entre los ochenta y en el año 2010 se consolidaron normativas jurídicas de enorme importancia, como la Ley de Igualdad Real, la creación del INAMU, las leyes contra la violencia doméstica y contra la violencia hacia las mujeres, la ley de cuotas para la participación política de las mujeres, las normas de apoyo a la maternidad como la ley de lactancia materna, entre otras. Además, se consolidaron instancias gubernamentales como la Defensoría de los Derechos de la Mujer, en la Defensoría de los Habitantes, la Delegación de la Mujer y las oficinas municipales de la mujer

y la creación de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial.

El mandato de los tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres también tuvo un efecto concreto y profundo en la constitución del Estado y sus instituciones, que paulatinamente ha permeado otros ámbitos. Esto no habría sido posible sin un trabajo potenciado colaborativamente entre activistas feministas, académicas, funcionarias del Estado y de organizaciones internacionales en torno a la causa común de exigir el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos humanos.

La dinámica de comunicación entre las activistas, académicas y funcionarias del Estado se facilitó a través de múltiples espacios de encuentro, diálogo y organización, facilitada a su vez por el intenso trabajo de organizaciones internacionales y de cooperación internacional que contribuían en la articulación de encuentros internacionales, reuniones de académicas y activistas, entre otras.

Uno de los problemas en torno al cual se ha logrado articular de un modo más efectivo el trabajo cooperativo entre diversos feminismos es la violencia contra las mujeres y el femicidio. Y hasta la fecha sigue siendo un eje articulador del activismo, del trabajo institucional y del trabajo académico feminista.

Ahora bien, el sistema económico dominante ha intervenido en estas luchas y movimientos sociales, al igual que en otros, vaciando de contenido político emancipador las reivindicaciones de estos grupos e instalando otros discursos y narrativas, más fácilmente asimilables al modo en que opera la economía de mercado. Esto es lo que Nancy Fraser ha discutido en su análisis sobre la representación y la redistribución.

Dicho de otro modo, la trampa de la representación y de la adopción estatal e institucional de ciertos slogans feministas ha generado algunos efectos adversos para las demandas y movilizaciones feministas. Si vemos con detenimiento la elección de Laura Chinchilla encontraremos algunos elementos que ilustran esta situación. Su pacto con los sectores más conservadores, de corte anti-feminista, fue clave en la elección su elección. Pero, al mismo tiempo, se usaba la narrativa de Laura Chinchilla como la primera mujer que podría ocupar el máximo puesto político de la república.



Trayectorias gubernamentales en clave neoliberal y derechos de las mujeres

Con la llegada de gobiernos que aplicaron políticas económicas de corte más claramente neoliberal se inició un deterioro del tejido social y del Estado de Bienestar, provocando un malestar social que ha ido creciendo de manera casi continua hasta la fecha.

Además, se dieron importantes conflictos sociales, motivados por decisiones políticas que fueron ampliamente rechazadas, como por ejemplo:

- Oscar Arias Sánchez (primer mandato): intentó las primeras acciones para vender o privatizar electricidad y telecomunicaciones.
- Rafael Ángel Calderón Fournier: aplicó diversas medidas de austeridad según indicación del Fondo Monetario Internacional (disminución de la planilla estatal, aumento de las tarifas públicas y recortes en ayudas sociales).
- José María Figueres Olsen: se firma el Pacto Figueres-Calderón, se cierra del Banco Anglo en medio de escándalos de corrupción y miles de familias fueron afectadas por la pérdida de sus ahorros. Dio paso a la liberalización bancaria y el cierre de múltiples instituciones estatales como el INCOFER.
- Miguel Ángel Rodríguez: sus planes de privatizar el ICE dieron pie a las grandes protestas contra el “Combo ICE”.
- Abel Pacheco de la Espriella: inicia negociación del TLC.
- Oscar Arias Sánchez (segundo mandato): Aprobación del TLC. Es importante notar la presencia de mujeres muy conservadoras en el congreso 2006-2010.
- Laura Chinchilla Miranda: también hubo muchas mujeres conservadoras en el congreso, incluyendo Rita Chaves, del PASE, quien inició con más determinación las campañas pro-vida. La gestión del Ejecutivo mantuvo siempre una posición anti-feminista y anti-LGBTIQ

Paradójicamente, también durante esos gobiernos se aprobaron o impulsaron algunas normas y políticas públicas de importancia para el movimiento feminista y de mujeres. Es decir, la valoración rigurosa sobre los avances en materia de derechos de las mujeres arroja resultados mixtos.

En el gobierno de Luis Guillermo Solís encontramos ciertas características que diferencian este período de los anteriores. Una de las más notables diferencias radica en la elección de los puestos de vicepresidencia. Por primera vez en la historia llegó a ocupar la vicepresidencia una mujer abiertamente feminista, que de manera pública y constante durante su carrera política ha apoyado el derecho al aborto, que siendo diputada trabajó codo a codo con el Movimiento por un Estado Laico en Costa Rica para presentar una reforma constitucional para eliminar el carácter confesional del Estado costarricense, que ha sostenido un apoyo constante a las luchas LGBTIQ, entre otros. Durante la campaña electoral muchas personas consideraron que la figura de Ana Helena Chacón le iba a costar votos a Luis Guillermo Solís en lugar de ayudarlo a obtener más apoyo político. Recordemos que Ana Helena Chacón ha sido atacada en muchas ocasiones por el Eco Católico, La Extra y otros medios por su apoyo a los derechos sexuales y reproductivos.

Durante el gobierno de Solís, Chacón desarrolló importantes políticas sociales en beneficio de mujeres en condición de pobreza y del sector LGBTIQ, con énfasis en las mujeres trans. Fue Ana Helena Chacón quien impulsó la consulta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de los derechos humanos, la identidad de género y la orientación sexual. Además, mantuvo un importante apoyo para que el Estado respondiera sus compromisos en fecundación *in vitro* y en la solución amistosa por el caso ante la CIDH relativo al aborto terapéutico.

Llegamos entonces al actual gobierno, luego de una campaña electoral que se desarrolló en términos nunca antes vistos en la historia de la república. La agenda discursiva, mediática y política, tuvo un carácter fundamentalmente anti-feminista, bajo el eslogan de la amenaza de la “ideología de género”. Aunque el Partido Restauración Nacional no ganó la presidencia de la república, sí obtuvo una victoria apabullante en las elecciones de diputados y diputadas, y con ello nos encontramos ante la confor-



mación legislativa más conservadora en la historia contemporánea.

Si bien Carlos Alvarado no es un político de convicciones conservadoras, sí ha modificado sustancialmente su discurso en razón del pacto de unidad nacional que firmó con el Partido Unidad Social Cristiana. Ese pacto de unidad nacional constituye un ataque más contra la autonomía de las mujeres, en general, y, en particular, contra la autonomía reproductiva que ha sido bandera del conservadurismo costarricense desde la elección de Laura Chinchilla hasta la fecha.

Neoliberalismo y desigualdad

Las políticas neoliberales han producido un aumento de la desigualdad y un sostenido deterioro de los servicios públicos y de las instituciones estatales. Esto tiene efectos más sensibles y profundos en las poblaciones más excluidas y empobrecidas, y dentro de esas poblaciones son las mujeres quienes experimentan las peores consecuencias.

Asimismo, la corrupción parece mantenerse igual aunque cambien los gobiernos, situación que causa un enorme daño a la credibilidad del Estado y sus instituciones, y alimenta los discursos de derechas en favor de un Estado mínimo y de la eliminación de las políticas sociales de las cuales dependen miles de mujeres en situación de pobreza.

Los costos sociales de la corrupción son enormes, tanto que la CIDH publicó un informe sobre corrupción y DDHH. Debe notarse que estos efectos negativos afectan mucho más a las mujeres más vulnerabilizadas. Este es uno de los grandes puntos que aún no ha sido abordado por las feministas activistas ni por las feministas académicas.

A su vez, la imposición excesiva de controles sobre políticas sociales entorpece el acceso a estos servicios y crea enorme frustración en las mujeres usuarias, y termina por re-victimizarlas. Esto genera enormes costos sociales que se traducen en una vuelta a la tradición religiosa que les ofrece comunidad de apoyo, dignificación y solidaridad.

Además, la actual gran crisis fiscal constituye una enorme amenaza a la estabilidad económica y política del país. Las políticas de austeridad, si

se aplicaran sin sentido de justicia redistributiva, terminarán por hundir a muchas más mujeres y a sus hijas e hijos en la pobreza y la pobreza extrema. Y ese es un camino plagado de violencia del que muchas mujeres no podrán salir nunca, a no ser que cuenten con ayuda sostenida en el tiempo, ya sea del Estado o de organizaciones no gubernamentales feministas, las cuales desde hace varios años se encuentran casi sin financiamiento. Las ONG que sobreviven más fácilmente son las que están asociadas a iglesias o grupos religiosos, que muy difícilmente tendrán una perspectiva de género o de Derechos Humanos.

El costo social y político del *Pinkwashing*/*Genderwashing*

Estos gestos políticos de apariencia progresista, que encubren políticas conservadoras o retrocesos en materia de justicia social y derechos humanos, se han tornado muy comunes en diversos países. En Costa Rica hemos visto sobre todo el *pinkwashing* (uso político oportunista de mensajes o gestos aliados con la diversidad sexual) y, de manera esporádica, algunos casos de *genderwashing* (uso político oportunista de mensajes o gestos aliados con la perspectiva de género o el feminismo *mainstreaming*).

La instrumentalización político-electoral de las demandas de inclusión y no discriminación resulta muy problemática. Se desacredita al movimiento social y sus reivindicaciones cuando estas estrategias retóricas son utilizadas por figuras políticas y de Gobierno que reducen las consignas y demandas feministas y LGBT a meros anzuelos para capturar votos en campaña electoral. La consecuencia es una trivialización de las luchas, reducidas a mera herramienta de disputa entre partidos políticos.

Resulta importante también señalar que en algunos países ya se ha podido confirmar que, en respuesta a los avances LGBT, los sectores conservadores afianzan su oposición contra los derechos reproductivos de las mujeres. Esta situación parece confirmar que los derechos de las mujeres casi siempre terminan siendo usados como moneda de cambio en las negociaciones políticas. Se requiere profundizar este debate y, sería también ideal, constituirlo en un tema de investigación.

Además, debe tomarse en consideración que ciertas demandas, como el matrimonio igualitario, son más



fácilmente asimilables por la economía capitalista que otras que son más urgentes para el grueso de las mujeres, como la demanda de igual salario por igual trabajo o las políticas efectivas contra la violencia física, sexual y psicológica, o el derecho al aborto.

La actual coyuntura nacional no se distancia mucho de la coyuntura regional. Nos enfrentamos a un panorama adverso para la vida y la ciudadanía de las mujeres, debido en gran parte a la expansión del fundamentalismo religioso.

Las expresiones políticas

Parece evidenciarse que el planteamiento público de las demandas feministas en el Siglo XXI en Costa Rica se realiza mayoritariamente desde las calles, con un lenguaje activista conectado con las consignas del movimiento feminista que podríamos denominar global. Los mensajes y los métodos de expresión que han emergido de los movimientos feministas en países más grandes y dominantes dentro de América Latina, como Argentina, México y Brasil, son captados y utilizados por los movimientos de otros países, como Costa Rica. Incluso, a veces es más fácil identificar el tránsito de mensajes y estrategias desde el Sur de América hasta las organizaciones activistas costarricenses que un diálogo entre organizaciones feministas centroamericanas. Vale aclarar que sí existe un diálogo activista en Centroamérica. Sin embargo, es notorio que las acciones de protesta en la calle se inspiran, con frecuencia, en otras que emergen desde países más lejanos pero que tienen más peso político regional, como Argentina y México.

Esta situación tiene aspectos positivos (refleja la transnacionalización de las luchas feministas, que es una estrategia de lucha implementada desde los años 80), y aspectos negativos (se corre el riesgo de copiar estrategias y agendas, sin que necesariamente atiendan las prioridades locales de las mujeres en el país). Uno de los retos del movimiento feminista en Costa Rica es mantener una doble atención: hacia afuera y hacia adentro de la región centroamericana. Y, a su vez, la brecha socioeconómica en el país entre lo urbano y lo rural se ha profundizado y la desigualdad aumenta, y tales contrastes también se reflejan en los feminismos. Es indispensable dar cuenta de la diversidad de mujeres, de la diversidad de necesidades y de demandas. Esto implica que

un movimiento feminista o coalición de organizaciones feministas tiene el desafío de administrar las contradicciones internas que puedan emerger, así como las tensiones y disensos, para lograr alianzas fuertes dirigidas a obtener unos objetivos claros, comunes y estratégicos.

Este es un reto importante, en vista de la atomización que caracteriza a los movimientos sociales en el país y la región en la actualidad. Estamos lejos aún de lo que Graciela di Marco ha denominado el “pueblo feminista”, que es la articulación amplia, “desde abajo” y en constante diálogo y negociación intersubjetiva, de las demandas de las mujeres en contra de la opresión de todas las mujeres.

En Costa Rica se han realizado varios esfuerzos en este sentido en distintos momentos históricos. La Agenda Política de Mujeres fue quizás el más exitoso, en el sentido de su capacidad de incidencia. Este año, en respuesta al muy preocupante escenario de la primera ronda electoral, se organizó el espacio llamado Mujeres en Acción. Aún es muy temprano para saber cuál será la ruta y los resultados de esta confluencia de mujeres. Sin embargo, es ya celebrable que se haya logrado organizar una plataforma de diálogo y construcción de acuerdos entre mujeres de distintos sectores frente a una coyuntura política límite.

No obstante, la mayor parte de los esfuerzos organizativos giran en torno a la movilización para la conmemoración de fechas significativas en la historia del movimiento feminista internacional, como el 8 de marzo, el 28 de setiembre y el 25 de noviembre. Si bien las conmemoraciones de estas fechas son actos políticos y de concientización social que tienen un peso significativo y que han sido estratégicas para colocar en el ámbito público ciertas discusiones sobre la desigualdad y la opresión que vive la gran mayoría de las mujeres, es también necesario analizar y evaluar si se requieren otras acciones y narrativas en el contexto actual.

Por otra parte, existen también varios grupos de feministas jóvenes concentrados sobre todo en la lectura, la formación y la facilitación de espacios de diálogo sobre preocupaciones comunes. Esos espacios son fundamentales para expandir la reflexión crítica y política. Pero, hasta donde se puede observar, son grupos que tienden a ser homogéneos. No existe una oferta de alternativas de diálogo y debate



intergeneracional, que sea más diversa en términos de clase, etnia/raza, trabajo y domicilio.

De igual forma, existen algunos grupos feministas ligados a partidos políticos, siguiendo una práctica que ya lleva varias décadas, desde que en el Partido Liberación Nacional se fundó el movimiento de mujeres liberacionistas. Tanto en partidos políticos de derechas como de izquierdas hay agrupaciones partidarias feministas en los cuales, no obstante, pesa más la agenda política partidaria que la agenda de diálogo feminista con otros sectores.

El trabajo estratégico de incidencia política pareciera no ser ahora la prioridad de ningún grupo u organización de base. Podría inferirse que la desconfianza en el gobierno, en el Estado y en los partidos políticos más tradicionales, ha impactado también la priorización de acciones y proyectos en el movimiento feminista.

La movilización continúa estando más motivada por lo reactivo que por lo propositivo, en términos de guiar o influir en el encuadre de las discusiones y acciones políticas. En ciertos momentos es más articulada que en otros, dependiendo del vínculo que pueda existir entre los grupos. Un ejemplo interesante es la estrategia de grupos de mujeres universitarias que luchan contra el hostigamiento sexual en las universidades. Usan el *hashtag* #MePasóEnLa (nombre de la universidad). Esta es una movilización que guarda ciertas similitudes en discurso y táctica con el movimiento #MeToo en Estados Unidos, que luego se tornó un fenómeno internacional.

Estos grupos están muy bien organizados de manera virtual con sus páginas web y una intensa red de coordinación y divulgación por redes sociales que les ha permitido crecer con rapidez y obtener información sumamente interesante, y también preocupante, sobre el grado del hostigamiento sexual en la academia. El punto que continúa siendo débil es el de la denuncia por las vías institucionales, en apego a los reglamentos y a la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia. Sin esas denuncias no existe ninguna posibilidad de abrir las investigaciones que podrían concluir en sanciones importantes para los profesores que han hostigado sexualmente a las estudiantes. Y, a pesar de las denuncias públicas, de las campañas educativas y de las políticas institucionales, parece que las estudiantes siguen sin conocer la existencia de los

reglamentos y los procedimientos para interponer una denuncia y recibir el acompañamiento legal y psicológico que ofrecen las universidades públicas.

Resulta de interés señalar algunos vacíos en las expresiones de lucha social que bien podrían deberse a una insuficiente visibilidad, o bien, que son vacíos precisamente porque se trata de áreas y temáticas que no están siendo prioridad en las movilizaciones feministas. Algunos ejemplos son la problemática medioambiental, la calidad de los servicios públicos (en salud y educación, por ejemplo), el acceso al trabajo digno y la criminalidad e inseguridad ciudadana.

Por otra parte, ha recuperado visibilidad el feminismo negro y el feminismo antirracista, las acciones y discursos feministas que dialogan con la migración y la lucha contra la xenofobia, y la articulación feminista con los movimientos de la diversidad sexual.

Qué es urgente y qué es necesario

Desde mi perspectiva, atendiendo la coyuntura nacional y regional, considero que es urgente, en primer lugar, comprender la distancia abismal entre lo que eran formas efectivas de hacer política feminista en la segunda mitad del siglo XX y lo que el siglo XXI está mostrando al respecto. Se necesita un espacio de diálogo activista-académico, abierto, pausado y creativo, para comprender el radical cambio que estamos viviendo en estos momentos ante la avanzada fundamentalista y neointegrista religiosa, neofascista y neoliberal.

De inicio, todo parece indicar que será indispensable prevenir más retrocesos. Ya hemos lo hemos hecho en materia de los derechos humanos de las mujeres, políticas sociales redistributivas y convivencia social democrática. Si bien el mero estancamiento es ya un retroceso, lo que estamos experimentando en esta época es el desmantelamiento de lo que costó décadas de esfuerzo construir.

Después más de treinta años de avances que, aunque modestos, fueron significativos y se condensaron en ciertos cambios institucionales y jurídicos (aunque hayan sido limitados, tuvieron un impacto directo y positivo en la vida de muchas mujeres y niñas), hoy todo el continente se encuentra en riesgo de perder todos esos logros. Si bien es cierto que tales conquis-



tas no fueron accesibles a todas las mujeres, ninguna mujer ganará nada si esos cambios son erradicados de la institucionalidad y del común de la sociedad.

La lucha feminista por una justicia económica y reproductiva se encuentra hoy con una pared de matonismo social que se burla, con toda la rabia acumulada por años de avances progresistas, de tales reivindicaciones. Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Carlos Avendaño, Fabricio Alvarado y todo el partido Restauración Nacional en Costa Rica, entre muchos otros de una larga lista, representan a sectores retrógrados muy bien organizados, coligados por el desprecio a las mujeres, a las personas LGBTQI, a la secularización y a la ética democrática. Muchos de esos militantes reaccionarios son gente de escasos recursos, sin educación, excluida de las oportunidades y de las acciones afirmativas. Es urgente entonces comprender este nuevo escenario, identificar su complejidad y sus contradicciones internas, para replantear los términos del discurso político feminista.

Las políticas neoliberales, cuyos efectos más negativos se concentran en los sectores más vulnerabilizados y excluidos de la sociedad, presentan uno de los desafíos más urgentes para la acción política feminista. Se hace indispensable volver a colocar la materialidad de la vida humana y ecosistémica en el centro de la organización de las ideas, las reflexiones, los debates y las estrategias feministas. Esto implica un indispensable diálogo con las ciencias ambientales y los movimientos sociales ecologistas; con los grupos campesinos (especialmente con las mujeres campesinas), las poblaciones indígenas y los sectores urbano-marginalizados. Pero también se requiere un diálogo con las mujeres de estratos socioeconómicos medios, trabajadoras, profesionales, mujeres que trabajan en el hogar, se identifiquen o no como feministas.

En esa misma línea, una tarea necesaria es ampliar la discusión y la construcción innovadora de propuestas sobre la economía, a sabiendas de que estamos en un contexto de excesiva desregulación de los mercados financieros. Esto implica ir más allá de los análisis sobre la economía del cuidado o de otros enfoques de la economía feminista. La diversidad de críticas y propuestas feministas en materia de empleo, sostenibilidad fiscal y justicia distributiva requiere llegar a unos mínimos comunes, cosa que es a todas luces una labor muy complicada.

El movimiento feminista, globalmente, enfrenta el reto de construir alianzas e impulsar sus luchas políticas en el entramado de sociedades altamente polarizadas, en las que la narrativa ultraconservadora y la narrativa progresista chocan de modos cada vez más violentos, con la consecuente desaparición de los pocos espacios de diálogo desde la diferencia y el disenso que existían. En Costa Rica urgen espacios para el análisis estratégico de las acciones públicas de protesta y propuesta feminista, y mucho más ahora, en este giro cultural y político hacia formas más descarnadas y envalentonadas de expresiones antidemocráticas y anti-feministas. Esto implica realizar ejercicios de evaluación y adecuación de las estrategias y adaptación a los escenarios cambiantes.

Es también necesario estudiar, desde la academia y desde los activismos, las significativas transformaciones entre las formas de encuentro, diálogo y coordinación dentro del movimiento feminista en las últimas tres décadas del siglo XX, y las formas puestas en práctica en el siglo XXI. Una enorme brecha que no sólo es generacional, sino también ideológica y de clase, atraviesa tanto al país como a los movimientos identitarios.

Por otra parte, existen ciertas problemáticas fundamentales de carácter estructural, que afectan a la gran mayoría de mujeres en el mundo. Son problemas ya identificados desde hace mucho tiempo, sobre los cuales se ha trabajado y luchado con algún nivel de éxito, pero que han adquirido una preponderancia debido a los ataques sistemáticos de los sectores conservadores, neomasculinistas y religiosos.

La primera de esas problemáticas es la autodeterminación de las mujeres, en especial en materia sexual y reproductiva. América Latina sigue siendo una región hostil a la autonomía de las mujeres, en todo sentido. Pero esa hostilidad adquiere matices mucho más intransigentes y violentos cuando se trata de la libertad sexual y reproductiva. La penalización absoluta del aborto es la norma en toda Centroamérica, con unas mínimas excepciones, como en Costa Rica con el acceso restrictivo al aborto terapéutico. La oferta de anticonceptivos (ya sean orales, el DIU o el implante) no alcanza a amplios sectores de mujeres que los requieren, sobre todo en áreas empobrecidas y rurales.

Esta situación se acompaña de un clima de impunidad hacia la violencia machista (física, sexual, emo-



cional y económica), una permisividad generalizada para el ejercicio de la coacción y la violencia sexual (incluyendo la resistencia de los hombres al uso del condón) y una muy limitada educación sexual.

De igual importancia es el serio problema de la precarización laboral, el desempleo y la dependencia económica que afecta a muchas mujeres de todos los grupos etarios. La vulnerabilización económica de las mujeres es una forma normalizada de exclusión, funcional a la división sexual del trabajo, al privilegio masculinista de no participar en las labores domésticas y de cuidado y a la legitimación de formas de trabajo indignas basadas en la explotación.

La situación empeora debido al cambio radical y global en el empleo, en la nueva economía de la automatización y la inteligencia artificial. Las economías crecen sin que crezca el empleo, y se profundiza la desigualdad que es ya escandalosa. Podría decirse que estamos experimentando una neo-feudalización de la economía y del trabajo.

La promesa de que la educación podía sacar de la pobreza a las mujeres, a través de más y mejores empleos ya no se está cumpliendo. El desempleo entre personas universitarias está aumentado. Y las mujeres que después de terminar una educación universitaria logran conseguir un empleo siguen enfrentando discriminación salarial y laboral, aunque estén mejor calificadas que sus colegas hombres.

Otro problema grave de carácter global, que afecta desproporcionadamente a las mujeres y las niñas es el cambio climático y las crisis ambientales asociadas a sus efectos. Las inundaciones, las sequías, los cambios en las estaciones que producen dificultades en la siembra y la cosecha de alimentos, el aumento del nivel del mar que va provocando la pérdida de tierra en las costas, el impacto sobre la reproducción de especies marinas, la muerte de los arrecifes coralinos, y un largo etcétera, son consecuencias del cambio climático que, en la vida cotidiana de las comunidades más vulnerabilizadas, genera consecuencias más peligrosas para las mujeres.

La labor de concientización y educación sobre el cambio climático es una urgencia impostergable, así como la incidencia en los procesos institucionales de elaboración de políticas de adaptación y mitigación al cambio climático. Gracias en parte a los compromisos de los organismos internacionales de

dar un carácter transversal la perspectiva de género en sus funciones institucionales, existen varios documentos aprobados en el marco de la ONU, OMS y del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que atienden el análisis diferencial de acuerdo al género. Pero este no es un tema que ocupe un lugar prioritario dentro del movimiento feminista.

Finalmente, se puede mencionar una situación problemática más, frente a la cual el movimiento feminista nacional y regional necesita enfrentarse, para no tornarse a fin de cuentas un movimiento socialmente irrelevante. Me refiero al ascenso del “fascismo social”, como lo denomina Boaventura de Sousa Santos. La profundización de la desigualdad socioeconómica tiene como relato dos reacciones trágicas: el aumento de la violencia y el desapego por los valores democráticos. La democracia que le falla a los más desposeídos se condena a sí misma. Y eso parece estar sucediendo, una vez más, en varios países de nuestra región.

El siglo XXI está siendo el escenario de profundas crisis de sentido en lo político y en lo cultural. Las crisis del Estado-Nación, de la ciudadanía, de los derechos humanos, de la democracia, están generando nuevas formas de organización apegadas a valores e ideas que pueden ser fascistas o proto-fascistas, como las milicias irregulares en Brasil y en EEUU, o agrupaciones como Sí a las Armas, Sí a la Vida, Sí a la Familia en Costa Rica.

La narrativa predominante de la lucha feminista en los noventa era por la ciudadanía plena, la justicia y la igualdad entre hombres y mujeres. Hoy ese discurso parece completamente inútil, al igual que las masivas manifestaciones sociales (feministas y de otros sectores). El poder que están recuperando los sectores más reaccionarios no sólo no se inmuta frente a las reacciones de indignación de las mujeres, los pobres o las personas homosexuales, sino que, muy a nuestro pesar, parece alimentarse de esas demostraciones de furia que vienen de los sujetos subalternos.

Conclusión y síntesis

En ausencia de una mirada histórica, los movimientos sociales corren el riesgo de no consolidar aprendizajes fundamentales para su acción política,



y el movimiento feminista no es la excepción. Además, la cultura de evaluación de las acciones y de disposición hacia una sana y estratégica autocrítica es indispensable para crear un movimiento social robusto, que pueda leer los contextos y coyunturas con claridad, de modo que tenga las herramientas para reaccionar ante los nuevos retos y amenazas.

El diálogo interseccional e intergeneracional es imprescindible para el trabajo político del movimiento feminista, pues una efectiva agenda y estrategia de acción política no se puede construir desde los particularismos de cada grupo o sector, y mucho menos desde la homogeneidad.

De igual forma, es preciso un diálogo entre los diversos movimientos sociales que luchan por la justicia y la emancipación, principalmente, entre los sectores ambientalistas y los sectores feministas. No existe, en este momento, una amenaza global más apremiante que los efectos desastrosos del cambio climático, los cuales están afectando y continuarán haciéndolo, y mucho más a países tropicales como Costa Rica y, dentro de estos países, a las mujeres y a las niñas.

En síntesis, el siglo XXI nos ofrece un panorama muy desalentador para los movimientos sociales por la justicia y la emancipación. El retroceso es evidente y las amenazas neofascistas, fundamentalistas y masculinistas han tenido ya efectos contundentes en el funcionamiento de los Estados de varios países. Tal es el caso de EEUU, Brasil, Guatemala, Honduras, Colombia y, en el caso de Costa Rica, estuvimos al borde de que esos sectores consiguieran su máxima victoria. Es urgente repensar las estrategias políticas frente a Estados, nociones de ciudadanía y de derechos que están en abierta crisis y cuyo significado y manifestación concreta están siendo rápidamente transformados.

Referencias

- Arango, Luz Gabriela (2007). *Género, mujeres y saberes en América Latina: entre el movimiento social, la academia y el Estado*. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
- Arguedas Ramírez, Gabriela (2011). El (aún) tortuoso camino hacia la emancipación: fundamentalismos religiosos, los derechos humanos de grupos históricamente oprimidos y la lucha por un Estado laico en Costa Rica. En *Anuario del Centro de Investigación y Estudios Políticos*, volumen 1.
- Arguedas Ramírez, Gabriela y Morgan, Lynn (2017). The reproductive rights counter offensive in Mexico and Central America. En *Feminist Studies* 43, N.2, p. 423-437.
- De Sousa Santos, B. (2004). *Reinventar la democracia. Reinventar el Estado*. Quito, Ecuador: Ediciones Abya Yala.
- Fraser, Nancy (1995). From redistribution to recognition? Dilemmas of justice in a 'post-socialist' age. En *New Left Review*.
- Piedra, Nancy (2015). La escena política de los movimientos de las mujeres en Costa Rica durante los últimos treinta años. En *Reflexiones* 94 (2): 65-77.
- Torres, Isabel (2011). *Costa Rica: movimiento de mujeres y liderazgo*. San José, Costa Rica: Centro de Estudios en Derechos.



Autora

Gabriela Arguedas Ramírez

Universidad de Costa Rica, directora de la Maestría en Estudios de las Mujeres, Géneros y Sexualidades. Profesora de la Escuela de Filosofía e investigadora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer.

Redes sociales:

Twitter: @maga72

Facebook: <https://www.facebook.com/gaby.arguedas.9>

Pié de Imprenta

Fundación Friedrich Ebert
San José Costa Rica

Mirko Hempel
Representante Fundación Friedrich Ebert
para Costa Rica, Panamá y El Salvador
Director del Proyecto Transformación Social
Ecológica
E-Mail: costarica@fesamericacentral.org
Tel.: +506 2296 0736
<http://www.fesamericacentral.org>

En 1965 la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES, Fundación Friedrich Ebert) abre en Costa Rica su primera oficina en la región centroamericana. El 23 de julio de 1965 se firma el Convenio de Cooperación entre el Gobierno de Alemania y el Gobierno de Costa Rica. El 1° de setiembre de 1980 se aprueba la Ley no. 6454 que lo ratifica. Por más de 50 años la Fundación Friedrich Ebert en Costa Rica ha desarrollado sus actividades como plataforma de diálogo, análisis político y de asesoría política. La participación de múltiples actores y el fortalecimiento de la democracia social son bases de la cooperación realizada con instituciones sociales y políticas costarricenses.

En la actualidad, la Fundación Friedrich Ebert, a través de su oficina en Costa Rica, desarrolla los dos proyectos de trabajo regional de la FES en América Central. Por un lado, El Proyecto Transformación Social Ecológica, que busca contribuir al fortalecimiento de las capacidades de gobierno democrático y social, aportar contenidos y apoyar diálogos hacia una economía social y ecológicamente sostenible, elaborar propuestas de modelos de desarrollo alternativo, y una política fiscal como instrumento de justicia social y de igualdad de género. Por otro lado, el Proyecto Juventudes Progresistas, que ofrece espacios de formación y fortalecimiento de liderazgos en las juventudes, e impulsar estos liderazgos para participar de manera más efectiva en procesos de defensa de la democracia y los Derechos Humanos. El concepto de planificación y las actividades de la FES en red de las seis oficinas centroamericanas consiste en la coordinación, el intercambio y la articulación regional con implementación nacional.

El uso comercial de todos los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) está prohibido sin previa autorización escrita de la FES.

Las opiniones expresadas en esta publicación no representan necesariamente las de la Friedrich-Ebert-Stiftung.